



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, seis de septiembre dos mil veintitrés

Tipo de pretensión:	Ejecutivo
Procedencia:	Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín
Demandante:	Hugo Diógenes Zapata Cruz
Demandados:	Ana Ruth Zapata Cruz
Radicado:	05001 31 03 012 2021 00305 01

Síntesis: Cuando en un proceso ejecutivo, con base en las excepciones cambiarias, el demandado alega que no hay ninguna causa que se corresponda con el valor del título que se le cobra, niega cualquier obligación a su cargo y a favor del demandante; y además desconoce haber entregado el título con la intención de hacerlo negociable, su contraparte (demandante) debe asumir las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria sobre la certeza de que la obligación incorporada en el título se corresponda con una obligación cierta y exigible derivada del negocio causal.

ASUNTO

La Sala resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte demandada frente a la sentencia del 21 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se decidió seguir adelante con la ejecución.

ANTECEDENTES

La demanda (cfr. c.1 arch. 3).

Hugo Diógenes Zapata Cruz demandó a Ana Ruth Zapata Cruz, dando lugar a un proceso ejecutivo. Se presenta para el cobro una letra de cambio por

valor de mil doscientos millones de pesos (\$1.200.000.000), con fecha de creación 18 de junio de 2015 y fecha de vencimiento 18 de junio de 2020. Lo que se pretende es el cobro coactivo del capital y los intereses moratorios.

La contestación a la demanda (cfr. c. 1 arch. 14)

La parte demandada afirma ser hermana del demandante. Ella, docente pensionada; él, abogado litigante. Señala que, dado el vínculo familiar, entre ellos han existido varias relaciones negociales. Ella ha invertido sus ahorros en compras de inmuebles, en conjunto con su hermano; un negocio de inversiones inmobiliarias. Los negocios se relacionan como “el apartamento de Laureles”, “el apartamento de Santa Marta”, “la finca de Las Palmas” y “la finca de Sopetrán”. Se detallan a partir del folio 5 de la contestación de la demanda.

En síntesis, la participación de la demandada en tales negocios sería la del inversionista; su hermano acá demandante, gestor de la ejecución de los negocios, gestor de créditos y de los litigios debido al impago de los créditos y otras estrategias negociales, que en la misma contestación se califican de fraudulentas; aunque la propia demandada accediera y se beneficiara de ellas en algunos casos, como también se confiesa.

Se reconoce la firma en el título valor que presentó el demandante como propia, porque siendo hermanos y teniendo negocios, la demandada firmó a su favor varios documentos. Sin embargo, se desconoce haber firmado los títulos con intención de obligarse. También se afirma que, en todas las relaciones de crédito entre las partes, el demandante fue el deudor y la demandada la acreedora. Expresamente se niega que se haya recibido del demandante un valor que soporte la suma de la letra y se desconoce a quien firma como “girador” en el título que se presenta para el cobro.

El diligenciamiento de la letra y la presentación para su cobro se atribuye a un ánimo defraudatorio del demandante. Se alega que éste ha incurrido en varias conductas abusivas y delictivas contra su hermana. Delitos como falsedad en documento y fraude procesal. La iniciación de otro proceso ejecutivo en Gómez Plata, con datos equívocos e imprecisos para la notificación, distintos a los que corresponde a este asunto. Se informa que el 26 de julio de 2022 la demandada interpuso querella penal frente al demandante por esos hechos.

Con base en estos hechos, se proponen las siguientes excepciones:

La sentencia de primera instancia:

Se desestimaron las excepciones y se dispuso seguir adelante con la ejecución.

Bajo la consideración normativa de que el título valor incorpora una obligación autónoma e independiente que se prueba con el documento, se consideró que la demandada no cumplió con la carga probatoria que le correspondía para cuestionar tal peso.

En la sentencia se insiste una y otra vez que la parte demandada no probó “la inexistencia de causa”; que no probó que el título no tiene una causa concreta; por el contrario, encontró “verosímil” la explicación causal del demandante que, en conjunto con la letra misma, harían plena prueba de la obligación causal.

En la sentencia se considera, en primer lugar, que las partes aceptaron que la demandada firmó la letra de cambio. Se considera que esto se aceptó al contestar la demanda y por tanto ni siquiera fue tema de prueba.

También se consideró plenamente probada la existencia de negocios relativos a la copropiedad de inmuebles entre las partes, que justificarían la firma de la letra, con lo cual estaría probado el negocio causal.

En efecto, se considera que, si el demandante no está en condiciones de probar movimientos de sumas de dinero a favor de la demandada que justifiquen la obligación de la letra, no se debe a una ausencia de causa, sino a la naturaleza del negocio entre las partes: según la sentencia, la obligación de pagar la suma incorporada en la letra, tendría su causa en una obligación de la demandada de “abstenerse de inscribir una escritura pública”, a través de la cual el demandante le habría vendido simuladamente un inmueble. Esta versión del demandante como causa de la obligación cambiaria se valora como “verosímil” y que la demandada no cumplió con la carga de desvirtuarla.

Se considera que las pruebas presentadas por los demandados no relativizan esta causa, pues, aunque los testigos niegan que la demandada le hubiera prestado dinero al demandado que pudiera justificar la obligación del título, también reconocen que entre las partes existieron negocios de compraventa de inmuebles y no son precisos a la hora de dar detalles sobre esos negocios.

También se consideró que es carga del demandado: a. probar que el título se firmó en blanco; b. probar que se dieron unas instrucciones específicas; c. probar que el acreedor desconoció esas instrucciones al momento de llenar el título.

La sustentación del recurso de apelación (cfr. c.2 arch. 05):

La parte apelante cuestiona la valoración probatoria de la primera instancia.

- Se alega que no es creíble la versión del demandante, según la cual se habría escriturado a nombre de la demandante un inmueble, de forma

simulada, para eludir una obligación alimentaria; pero que esto se hubiera condicionado a que no se registrara la escritura -lo que según la sentencia, sería la causa “verosímil” de la obligación cambiaria por valor de \$1.200.000 a cargo de la demandada-. Se considera que si no se registra la escritura no se logra el efecto que se atribuye a la supuesta simulación. En consecuencia, se afirma que el demandado mintió o que su versión no es verosímil.

- Se indica que la juez ignoró las explicaciones de los testigos sobre las razones por las cuales no se inscribió la escritura; que se ignoró las explicaciones que dieron sobre esos negocios; y sus expresas declaraciones sobre la inverosimilitud del valor de la obligación cambiaria, pues ambos afirman que siempre ha sido el demandante quien ha sido deudor de la demandada, su hermana mayor, a la que acude para pedir préstamos y financiar sus negocios. Se alega que eso se probó con las pruebas documentales.
- Se alega que no se valoró adecuadamente el hecho de que el demandante haya presentado otra demanda contra su hermana, también con un título que ésta niega haber entregado con ánimo de obligarse, en el municipio de Gómez Plata, en una dirección incierta que no tiene nada que ver con el domicilio ni la residencia de su hermana. Esta demanda, según uno de los testigos, habría sido calificada como una “extorsión” por parte de uno de los testigos; se presentó la demanda, sin una causa, como en este caso, como una estrategia para obtener un embargo e impedir una negociación; o para obtener que la demanda hiciera unos pagos para cumplir con otros pagos. No se explican cómo obtuvieron las letras firmadas.
- Se alega que la prueba documental y los testimonios practicados concuerdan con la versión de la parte demandada sobre una “ausencia de causa”.

- Se solicita que se valoren los siguientes indicios, que no se valoraron en la sentencia de primera instancia: se afirma que el demandante está mintiendo y que eso se evidencia en sus declaraciones y faltas de concordancia. Se insiste en la inverosimilitud de una simulación que no se inscribe. Se alega que fue evasivo y habló de cosas que no se le preguntaba. Se afirma que al actuar en causa propia, intentó intimidar a los testigos, sus sobrinos, y que sobre su hipótesis del negocio causal, la única prueba es su versión.
- Se destacan los equívocos, cambios de versión y olvidos del demandante en su declaración, no sólo sobre la elaboración del título, sino también sobre el negocio causal. Olvida quien fue el girador, no responde sobre aspectos claves del negocio, es evasivo, cuanto actúa como abogado en propia causa induce respuestas, etc.
- Se alega que la juez no valoró adecuadamente la falsedad del documento; pues el análisis se limitó a reconocer que la letra la firmó la demandada, más no la falsedad de las expresiones contenidas en éste.
- Expresamente se cuestiona la distribución de las cargas probatorias. Se afirma que la negación indefinida consistente en negar que la obligación del título tenga una causa, invierte las cargas probatorias en razón de la disposición del artículo 167 del CGP.
- Se alega que, en este caso, aunque se pruebe que la firma en la letra es de la demandante, no hay ninguna evidencia ni de que ésta se entregó con el ánimo de obligarse para convertirse en un título valor. Señala que es el acreedor el que debe probar esta obligación, ante la negación indefinida.
- El llenado de la letra se califica como “un ajuste de cuentas suyo” y un ejercicio de autotutela; es decir, unilateral del demandante; sin que haya

ninguna claridad o certeza sobre las condiciones de creación del título o la certeza de que la obligación que incorpora se corresponda con el negocio causal; sin que estén las cuentas claras.

- La parte demandante pide a la Sala que se valore lo que la primera instancia ignoró o valoró erráticamente: la condición de salud de la demandada, en tratamiento por neuropsicología. Se afirma que se valoraron inadecuadamente sus afirmaciones, cuando se evaluó en su contra el hecho de que ella afirmara no recordar haberle entregado una letra.

Según certifica la Secretaría, el asunto se ingresó al Despacho sin alegaciones de la parte no apelante (cfr. c.2. arch. 06).

CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos:

Atendiendo los planteamientos de la parte apelante, la Sala abordará los siguientes problemas:

- Cuando en el proceso ejecutivo, con base en las excepciones cambiarias, el demandado alega que no hay ninguna causa que se corresponda con el valor del título que se le cobra, niega cualquier obligación a su cargo y a favor del demandante; y además desconoce haber entregado el título con la intención de hacerlo negociable ¿cuál de las partes debe asumir las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria sobre la certeza de que la obligación incorporada al título se corresponda con una obligación cierta y exigible derivada del negocio causal?

Lo anterior teniendo en cuenta estas condiciones particulares: a. que las partes sean hermanos entre sí; b. que el demandante, abogado litigante, en sus negocios de compra en copropiedad con su hermana - docente pensionada, en tratamiento neurológico-, ha actuado como agente ejecutor y ésta como inversionista o prestamista de aquél, en una relación de confianza determinada por la familiaridad; c. que en esa sociedad de hecho, nunca se han rendido cuentas con claridad.

- Una vez determinado lo anterior, se evaluará la prueba practicada, con el fin de verificar si existe certeza o no sobre la calidad de deudora de la demandada respecto del demandante en razón de un negocio causal.

Fundamentos jurídicos:

Un título valor, como una letra de cambio, no es sólo un documento que hace prueba de un derecho; por ficción de ley, se considera que el documento mismo es el derecho, o que lo incorpora; se tiene derecho a lo que literalmente exprese el documento –art. 619 del Código de Comercio-.

Las razones históricas y teleológicas que justifican la necesidad de esa ficción, se relaciona con las necesidades del comercio, donde se acostumbra el intercambio de valores de una manera rápida y segura, valores distintos al dinero en efectivo: un crédito, una mercancía, una acción, etc. Como los negociantes comercian con cosas distintas al dinero, la ley de los comerciantes regula instrumentos jurídicos, ficciones, que faciliten esa actividad, estableciendo reglas claras de intercambio. Todas las garantías legales derivadas de la literalidad e incorporación del derecho en el título valor, son supuestos regulativos para la creación y circulación de las letras de cambio entre comerciantes, en el plano de sus relaciones sustanciales de índole negocial.

Esta es la lógica: si A le compra a B un crédito cambiario que B tiene con C, A tiene derecho a cobrarle a C el crédito en los términos literales que exprese el título, por ejemplo, la letra. A puede incluso pretender el cobro ejecutivo frente a C, sin que éste pueda decir que no tiene una relación de crédito con A, con que lo que se cobra no se causó, que no se debe, o es distinto de lo se debe a lo que expresa el título, o incluso pagos parciales cuya constancia no obre en el cuerpo del título. Funciona con créditos, mercancías, acciones, etc.

Estas características de los títulos valores también tiene una consecuencia procesal directa: si una persona presenta un título valor con todas las condiciones legales ante un juez, persiguiendo el cobro del derecho que expresa el título, el juez debe librar mandamiento de ejecutivo –art. 430 del CGP. Además, retomando el ejemplo, C sólo puede oponer a A las excepciones cambiarias expresas del Código Comercio, salvo las cuestiones relativas al negocio causal entre B y C, pues éstas no le son oponibles, salvo mala fe.

Así las cosas, si C reconoce su firma en el título, las excepciones derivadas del negocio causal entre C y B no son oponibles a A. El título haría plena prueba del derecho autónomo y literal que incorpora.

El artículo 784, numerales 11 y 12 del Código de Comercio refieren dos excepciones cambiarias sobre las cuales es pertinente considerar en este caso: las derivadas de la entrega del título sin la intención de hacerla negociable y las derivadas del negocio jurídico que dio lugar a la creación del título. Lo anterior bajo la siguiente condición: que demandante y demandado sean las mismas partes del negocio causal; es decir, que el título no haya circulado. El negocio causal fue entre A y B, que a su vez son acreedor y deudor en el título valor y demandante y demandado en el proceso.

A diferencia de lo que pasa en la posición que ya se analizó, B si puede oponer a A las cuestiones relativas al negocio o la inexistencia de un negocio causal,

a través de las excepciones cambiarias. Así, por ejemplo, puede alegar que, aunque firmó el título, en la ejecución negocio causal se dieron hechos o actos que modificaron o extinguieron la obligación originaria; por ejemplo, pago (aunque no conste en el título), novación, etc.

Bajo este supuesto, la carga argumentativa y probatoria corresponde al demandado excepcionante, siguiendo la regla general del artículo 167 del CGP. Es decir, si afirma que hubo un pago, debe afirmar las circunstancias del pago (medio, tiempo, modo, lugar) y probarlas. La duda o insuficiencia probatoria sobre tales circunstancias, se resuelve en contra de la excepción; debe darse el peso que corresponde al título valor como medio probatorio.

Otro razonamiento merece la siguiente circunstancia: si lo que dice el demandado es que el título que presenta el demandante “no se corresponde con ningún negocio causal”. Esto es una “negación indefinida”. Por lógica (no se puede probar algo que no es), incluso sin necesidad del inciso final del artículo 167 del CGP, tal negación “no requiere prueba”. La consecuencia es clara: si el demandante afirma que el demandado deudor cambiario fue parte del negocio causal y el demandado excepciona negando de manera indefinida cualquier causa que justifique el título; en principio debe darse por probada la “inexistencia de causa”, pues “las negaciones indefinidas no requieren prueba”. Es razonable exigir al demandado una explicación verosímil sobre por qué se firmó el título, acreditando situaciones circunstanciales, cuando sea del caso.

A menos que el demandante pruebe las causas concretas de la obligación cambiaria, esto es, la correspondencia entre la obligación cambiaria con una obligación causal cierta, la excepción de reconocerse. Las dudas o ausencias probatorias sobre este punto, se resuelven en contra de la pretensión ejecutiva: sólo se sigue adelante con una ejecución, cuando no cabe ninguna duda sobre esa correspondencia; es decir, sobre la calidad de deudor del demandado, por el valor que se cobra.

Esta carga no debería ser un problema para personas que extienden títulos cambiarios, actos de comercio, que por exigencia de ley requieren un soporte contable claro y expreso que el acreedor cambiario debería llevar –art. 48 del Código de Comercio-. Por el contrario, imponer esta carga a quien niega la causa es contrario a la ley.

En este punto es inadecuado aludir a la literalidad, la autonomía o el principio de incorporación de los títulos valores, para dar por probada las cuestiones del negocio causal propuestos en la excepción. Simplemente impertinente, pues este tipo de excepción se opone precisamente a quien presenta un título sin causa, o sin que haya certeza sobre la causa.

Este razonamiento, por sí mismo suficiente para justificar la regla de distribución probatoria, se fortalece sí, además de las dudas sobre la correspondencia entre la obligación que se expresa en el título y una obligación causal cierta, se presentan las siguientes condiciones:

- a. Que las partes sean hermanos, cónyuges, padres e hijos, u otros familiares cercanos entre sí; es decir, que la causa de los negocios que dieron lugar al título, no sea o exclusiva o necesariamente el ánimo de lucro –como ocurre entre las personas que se dedican profesionalmente al comercio-, sino en vínculos de cariño y solidaridad derivados de la relación familiar, que a menudo involucran causas y efectos extrapatrimoniales.
- b. Que haya habido entre las partes múltiples negocios en sociedad de hecho, distintos a aquél que se afirma como causa del título, y que no haya habido un ajuste claro de cuentas. Es decir, que aunque se prueben relaciones de negocios entre las partes, no sea ni claro, ni cierto, sino dudoso y controvertido, la existencia o determinación de las obligaciones recíprocas.

A consideración de la Sala, las garantías del Código de Comercio para facilitar la operación de los comerciantes, especialmente para la circulación de los títulos según las leyes cambiarias, pueden interpretarse erráticamente para justificar un ajuste unilateral de cuentas, en una sociedad de hecho entre familiares.

Caso concreto:

El demandante Hugo Diógenes Zapata Cruz presentó para su cobro ejecutivo la siguiente letra de cambio, frente a su hermana acá demandada Ana Ruth Zapata Cruz:

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

No. [Redacted] POR \$ 1.200'000'000

SEÑOR Ana Ruth Zapata Cruz

EL DIA 18 DE Junio DEL AÑO 2020 SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE

EN Medellin A LA ORDEN DE Hugo Diogene Zapata Cruz

EXACTOS Mil doscientos millones de pesos

PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 1 % MENSUAL TODAS LAS PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO.

Sus S.S. Flores

Medellin 18-06 Del año 2015

Ciudad Fecha

En la sentencia de primera instancia se dio por probada la causa de esta obligación de \$1.200.000.000, con base en la verosimilitud de la versión del demandante sobre el punto, a saber: que entre los hermanos se han celebrado distintos negocios de compra y posesión de inmuebles; que uno de esos negocios implicó una finca en Envigado, que el demandante avalúa en

\$3.000.000.000; que el demandante le habría vendido simuladamente a la demandada, para eludir una obligación alimentaria, su participación en ese inmueble; que la demandada firmó la letra como garantía de que no inscribiría la escritura pública de la venta simulada, dejando en blanco sólo los aspectos relativos a las fechas; la obligación cambiaria que se expresa en la letra, se habría causado, entonces, en no atender esa obligación de no hacer.

Según la sentencia de primera instancia, debe continuar la ejecución porque esta afirmación del demandante es “verosímil” y porque con las pruebas recaudadas la parte demandada no logró desvirtuar el peso probatorio de la letra, demostrando que no había una causa concreta para la obligación; o que, a pesar de haber firmado la letra, no probó que no la entregó con la intención de hacerla negociable.

En concordancia con lo ya expuesto, la Sala considera que en la sentencia de primera instancia se comprendió inadecuadamente el tema y la distribución de la carga de la prueba.

Si bien es cierto, como se señala en la sentencia, que en principio el demandado tiene la carga de afirmar y probar las circunstancias de la excepción cambiaria, se ignora no sólo el inciso final del artículo 167 del CGP, sino la lógica del razonamiento causal, cuando se le impone probar las condiciones concretas del negocio causal, a pesar de que se afirma que el título carece de causa y que no se sabe concretamente como resultó en manos del demandante. En tanto la demandada niega la existencia del negocio causal o la intención de obligarse, de manera indefinida, ese hecho no requiere prueba; debe darse por probado. Artículo 167 inc. Final CGP.

Por tanto, para controvertir el hecho indefinido que se alega en la excepción cambiaria –no hay causa para la obligación-, corresponde a la parte demandante ejecutante acreditar las circunstancias concretas del negocio causal: probar que la obligación que se expresa en el título, se corresponde

con una obligación cierta del negocio causal que es su correlato. Presentar las cuentas claras que la ley comercial le obliga a llevar.

En oposición de lo que se concluyó en la primera instancia, esta Sala considera que la explicación que dio del demandante sobre el negocio causal no es verosímil sino francamente dudosa. Si se tiene en cuenta la prueba practicada al interior del proceso, que por cierto, fue aportada en su mayor parte por la parte demandada, esa ausencia de verosimilitud es manifiesta; pruebas que incluso, más allá de lo expresado sobre las cargas probatorias en líneas precedentes, y en virtud del principio de comunidad de la prueba pueden ser perfectamente colegir que están confirmados los supuestos de hecho para tener como probada la excepción propuesta.

Como bien señala la apoderada de la parte demandada, el fin elusivo de una simulación se perfecciona con su registro. Si el demandante quería defraudar a “la mama de su hijo”, la Sala no encuentra lógico que se simule una compraventa de un inmueble, con la condición de que no se registre. El objetivo de defraudar en una simulación, supone el registro del negocio simulado. Por tanto, esta hipótesis, que la parte demandada niega, resulta dudosa.

Aún más, las múltiples confesiones que hace el demandante, sobre las maniobras jurídicas para eludir obligaciones o buscar ventajas en los negocios usando herramientas jurídicas, se valora como indicio grave en su contra en este caso.

Esto se identifica claramente en un hecho que alega la demandada y que éste acepta en audiencia: presentó otro proceso ejecutivo contra su hermana, en otro municipio, intentando la notificación en un lugar donde ésta no reside ni trabaja. Un abogado litigante con experiencia, intentando notificar a su hermana mayor, docente pensionada, donde es presumible que no se le

encuentre. Esto ha de valorarse como un indicio en su contra que el tribunal no puede pretermittir.

La demandada, en su interrogatorio, no sabe cómo obtuvo del demandante la letra firmada por ella. Confrontada con lo que se alegó en la contestación, donde se reconoce la firma del título, ella explica que en la relación de confianza con su hermano, firmaba documentos basada en la confianza. En cualquier caso, ella desconoce cualquier obligación por ese valor.

Por otro lado, están las declaraciones de los testigos, Jhon Fernando Zapata Beltrán y Luisa Alejandra Zapata Beltrán, sobrinos de las partes. Conocen bien a las partes, por el vínculo familiar. Ambos coinciden en señalar que efectivamente las partes han participado en negocios conjuntos, compra de inmuebles. Algunos de ellos en compañía de otros hermanos.

También son coherentes al declarar que, en los negocios relativos a los inmuebles, la demandada Ana Ruth Zapata Cruz ha participado a instancias del demandante, Hugo Diógenes Zapata Cruz. Su rol ha sido invertir dinero, producto de su trabajo como docente, ahora pensionada. Por su parte, su hermano ha sido quien, con los negocios, realiza contratos, gestiona créditos y litigios, en su calidad de abogado litigante con inversiones inmobiliarias. Se mencionan como negocios conjuntos de las partes “el apartamento de Laureles”, “el apartamento de Santa Marta”, “la finca de Las Palmas o de Envigado” y “la finca de Sopetrán”.

Otro punto en el que coinciden los testigos es la inverosimilitud del valor del crédito que cobra el demandante a su hermana. Los dos testigos señalan con énfasis que, por lo que saben y les consta de los negocios entre sus tíos, ha sido siempre el demandante quien ha tenido obligaciones a favor de la demandada; es él quien la busca cuando necesita dinero, como un hijo a una madre. Aunque no saben dar detalles de los negocios, sí consideran improbable que se adeude esa suma, por cualquier concepto. Esta situación

se acredita también documentalmente, con los títulos que presenta la demandada a cargo del demandado.

La causa de una obligación es el correlato obligacional específico, cierto y claro que sirve de motivo al acto jurídico –art. 1524 del C. Civil-. Es decir, no es causa de una obligación concreta –pago de \$1.200.0000.000, el hecho general de que entre las partes haya existido negocios. La causa de esa obligación tendría que ser producto de una liquidación de la sociedad de hecho que, en atención a los aportes, las utilidades y las reglas de distribución, resulte claro y cierto que la demandada debe \$1.2000.0000.

Ambas partes y los dos declarantes, reconocen explícitamente que ha existido una sociedad de hecho entre las partes y que ésta no se ha liquidado. Sin embargo, a diferencia de lo que se razona en la sentencia de primera instancia, el hecho de que se pruebe que entre las partes haya habido negocios plurales, esto no confirma una sociedad de hecho, donde sea “verosímil” que la hermana docente pensionada e inversionista haya engañado a su hermano abogado litigante y gestor, en la ejecución del negocio.

Aun aceptando lo anterior, la causa no es clara porque sólo hay incertidumbre de por qué la letra se firmó por \$1.200.000.000; más allá de la afirmación del demandante, según la cual su hermana lo engañó al inscribir la escritura simulada de un inmueble que “vale mucho más”.

Conclusiones:

La sentencia de primera instancia debe revocarse porque aplicó inadecuadamente las reglas de distribución probatoria y porque se erró al valorar la prueba. Dadas las circunstancias del caso, el alcance del artículo 167 inciso final del CGP y la prueba recogida (que ya es común para el proceso), resulta inviable mantener la ejecución. No solo hubo una negación indefinida, sin que el actor haya asumido sus propias cargas de que la obligación en el

título se corresponde con una obligación causal cierta, clara y concreta; se tiene, además, que en este caso el material probatorio es suficiente para derribar la certeza que el derecho literal y autónomo que incorpora la letra que se presentó para el cobro.

El demandante da una versión inverosímil de los hechos. Asume y confiesa conductas procesales y prácticas jurídicas de dudosa buena fe. Se intenta cobrar una suma con por una suma que, según los testigos, resulta improbable que le adeude su hermana mayor. Pero, sobre todo: claramente se intenta utilizar un cobro coactivo, eludiendo un deber mínimo de lealtad contractual, no digamos entre hermanos sino entre comerciantes: una liquidación clara y justa de la sociedad de hecho, de modo tal que sea transparente la causa de lo que se cobra.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia.

COSTAS

Con base en lo dispuesto en el artículo 365.4 del Código General del Proceso, se condena en costas a la parte demandante en ambas instancias.

Como agencias en derecho para esta instancia, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, la calidad y la actuación de la parte favorecida con las costas se fijará una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión en Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia de fecha 21 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín.

Segundo: Reconocer las excepciones de falta de una causa concreta y clara que respalde la obligación cambiaria, art. 784 del Código de Comercio. En consecuencia, se dispone cesar la ejecución.

Tercero: Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias. Como agencias en derecho para esta instancia, se fija una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Notifíquese y cúmplase

Los Magistrados,


MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ


JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
(En ausencia justificada)